

**Para Uso Inmediato:
23 Marzo 2005**

Organizaciones de derechos humanos piden al gobierno estadounidense retener la reanudación de asistencia militar a Guatemala dado el deterioro en la situación de derechos humanos

Washington, DC- En los últimos meses, el gobierno de los EE.UU. ha manifestado su intención de mejorar las relaciones militares y reanudar la asistencia militar a Guatemala. El gobierno de Guatemala espera que dicha intención se haga oficial durante la visita a Guatemala del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, este jueves, 24 de marzo. Como organizaciones estadounidenses trabajando por la defensa de los derechos en Latinoamérica, pedimos al gobierno estadounidense retener la reanudación de la asistencia militar a Guatemala hasta que el gobierno de Guatemala adopte pasos concretos para enfrentar las persistentes violaciones a los derechos humanos en el país.

En los últimos años, los defensores de los derechos humanos guatemaltecos han sido sujetos de una nueva ola de ataques y amenazas perpetradas por grupos clandestinos o grupos ilegales armados los cuales debieron haber sido desmantelados tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Según informes, estas redes amorfas tienen vínculos con la inteligencia militar y el crimen organizado. En el 2004, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos reportó 122 ataques y amenazas, y en lo que va de este año, por lo menos 26 defensores de derechos humanos han sido amenazados o atacados. Es más, según el informe final de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA), “en general, los intentos de investigar y procesar a miembros de los cuerpos de seguridad por las atrocidades cometidas durante el conflicto no han tenido éxito; quienes lo han intentado han tenido que sufrir amenazas, violencia y años de obstaculización judicial.”

Las actividades de los grupos clandestinos han socavado el sistema judicial y perpetuado un clima de impunidad e inseguridad, lo cual a su vez ha conllevado a generar un clima más propicio para la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Los grupos clandestinos se han convertido en una seria amenaza para el proceso de paz, el estado de derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos; deben ser desmantelados.

Si bien la administración de Óscar Berger ha declarado públicamente su compromiso por combatir la impunidad y los grupos clandestinos, ha demostrado una falta de voluntad política y capacidad para avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para la investigación y el desmantelamiento de estas estructuras clandestinas, un tema que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado de alta prioridad en sus relaciones con Guatemala. Un acuerdo firmado en enero del 2004 para establecer una comisión de la ONU de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) fue derrocado tras la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad en contra de aspectos claves del acuerdo. El acuerdo fue fuertemente apoyado por los Estados Unidos. Las nuevas propuestas presentadas en noviembre del año pasado para investigar a los grupos clandestinos aparentemente no han progresado.

Mientras el gobierno de los Estados Unidos considera si reanudar o no la asistencia militar hacia Guatemala, debería analizar la observar profundamente la situación de derechos humanos en el país y la falta de avance por parte de las autoridades del gobierno de Guatemala en promover y defender los derechos humanos, fortalecer el estado de derecho y limitar el papel de las fuerzas militares a la seguridad externa. Las fuerzas militares continúan participando en patrullas combinadas con la policía, lo cual constituye una violación a los Acuerdos de Paz. A cambio de promover la participación de las fuerzas castrenses en las patrullas combinadas, deberían enfocar esfuerzos en el fortalecimiento del aparato civil de seguridad.

Guatemala ha experimentado cambios significativos desde la firma de los Acuerdos de Paz. No obstante, retos substanciosos persisten en temas concernientes a los derechos humanos, la democracia

y la seguridad ciudadana. Problemas de corrupción, inequidad, crimen y un debilitado estado de derecho prevalecen. De no ser adecuadamente atendidos, pueden conllevar a un incremento de tensiones sociales y a un deterioro de la gobernanza democrática.

Washington Office on Latin America (WOLA)
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights
Network in Solidarity with the People of Guatemala
Guatemala Human Rights Commission